

Santiago, veintisiete de marzo de dos mil veinticuatro.

Vistos, oídos y considerando:

1° Comparece **Jose Mauricio Monsalve Castillo**, docente, cédula nacional de identidad N°10.766.574-9, domiciliado para estos efectos en Nicanor Molinare 3432, Comuna De Macul, Santiago, quien deduce demanda laboral, en procedimiento de aplicación general, por despido injustificado, nulidad del despido, cobro de prestaciones y devolución de aporte patronal de AFC, en contra del **Preuniversitario Pedro De Valdivia Ltda.**, RUT N° 85.698.200-9, representada legalmente por Maria Virginia Seyler Massari, Cl. N° 6.597.837-7, ambos domiciliados en Avenida Pedro De Valdivia N°1874, Providencia, Santiago.

Que, en relación a la controversia, sostiene que, en su calidad de docente de la demandada, durante el año 2022, se le rebajó unilateralmente su remuneración en \$400.000 mensuales, ya que no se suscribió anexo alguno y se continuaron realizando las clases acordadas con su empleador en los mismos términos que el año 2021. Por tal concepto, señala que se le adeuda un total de \$4.800.000 por concepto de remuneraciones de enero a diciembre de 2022, más las cotizaciones correspondientes y la sanción de nulidad del despido contemplada en el artículo 162 inciso quinto y siguientes del Código del Trabajo.

Que, en cuanto al despido, señala que no está de acuerdo con los hechos señalados en la carta correspondiente, y que no configuran la causal invocada. Sostiene que los hechos no pueden quedar entregados a la mera discrecionalidad del empleador, y que debe tratarse de hechos objetivos que hagan inevitable la separación de uno o más trabajadores. Conceptualiza lo que a su juicio es una necesidad de la empresa, e indica que la demandada deberá probar los hechos que invoca.

Señala que suscribió finiquito y se le hizo pago de sus indemnizaciones legales, y feriados y se le descontó una suma por concepto de AFC.

Pide se acoja la demanda, se declare el despido injustificado, se ordene el pago del recargo del 30% de la indemnización por años de servicios, por \$7.739.695, más las diferencias de remuneraciones indicadas por \$4.800.000, la suma descontada por concepto de AFC por \$2.405.894, y la sanción de nulidad del despido. Todo lo anterior con intereses, reajustes y costas.

2° La demandada **contesta la demanda** y pide su rechazo todas sus partes. Señala que el despido se fundó en los hechos señalados en la carta, y que no habían



cursos disponibles para asignar al docente para el año 2023, toda vez que él solicitó hacer clases sólo en Sede Virtual. Que, a diferencia de los años inmediatamente precedentes, se experimentó una disminución en la demanda de clases virtuales. En efecto, el año 2023 su representada abrió en promedio tan solo un 40% de las sesiones de biología y química que fueron impartidas en el mismo ramo durante el año 2022. En consecuencia, señala que existen razones objetivas y ajenas a su representada que hicieron indispensable el despido, por lo que la causal se ajusta a derecho y pide el rechazo de la demanda.

Por otra parte, señala que es legal la imputación efectuada por concepto del aporte del empleador al seguro de cesantía, cita lo dispuesto en los artículos 13 y 52 de la Ley N°19.728, y jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Santiago y Corte Suprema.

Respecto de la remuneración que se cobra, indica que no es efectivo que se le haya rebajado unilateralmente sus remuneraciones durante el año 2022, y refiere a los conceptos fijos y variables que la componían, y a qué servicio corresponde cada una. Agrega que, si bien pudiera notarse alguna diferencia entre las remuneraciones percibidas el año 2021 y el año 2022, ello se debió a que en el 2021 el docente hizo reemplazos la mayor parte del año y se le asignaron talleres y 5 cursos diferidos, y que el año 2022 no presentó esas asignaciones variables. Por otro lado el año 2022 se le asignaron 27 sesiones virtuales y el año 2021 fueron 22 las sesiones virtuales y una presencial.

Finalmente indica que se encuentran íntegramente pagadas las cotizaciones previsionales por todo el período trabajado.

En definitiva, pide el rechazo íntegro de la demanda, con costas.

3° Que en folio 29, consta el acta de la audiencia preparatoria a la que comparecen ambas partes y llamadas a conciliación, no se produce. A continuación se fijaron los hechos controvertidos y no controvertidos y las partes ofrecieron sus pruebas.

La audiencia de juicio se celebró con la asistencia de ambas partes y se rindieron las pruebas como se desprende del acta subida al sistema SITLA en el folio 34.

4° Establecimiento de los hechos y consideraciones jurídicas:

- i. En la audiencia preparatoria se establecieron, entre otros hechos, la existencia de un vínculo laboral entre las partes bajo subordinación y dependencia con fecha de inicio el 8 de abril del 2002; que la última remuneración ascendió a

\$2.345.362; que las funciones que el actor desempeñaba al término de la relación laboral eran de **docente sede virtual**.

- ii. En el mismo sentido, la demandada no controvertió que despidió al actor el 24 de marzo de 2023, invocando para ello la causal de **necesidades de la empresa**.
- iii. Consta de autos que las partes suscribieron un finiquito ante Notario el 05/04/2023, con reserva de derechos, mediante el cual se le hizo pago de las indemnizaciones legales (\$25.798.982 por indemnización por años de servicios; \$2.345.362 por indemnización sustitutiva del aviso previo; \$426.437 por concepto de feriado) y se descontó la suma de \$2.405.894 por concepto de AFC.
- iv. Que el actor cobra la suma de \$4.800.000, por concepto de diferencias de remuneraciones devengadas entre enero y diciembre del año 2022, a razón de \$400.000 mensuales. Para fundamentar su pretensión señala que se habría rebajado unilateralmente sus remuneraciones el año 2022, en relación con lo percibido el año 2021, sin embargo, de la prueba incorporada se desprende que las condiciones de trabajo variaron de un año a otro, y componiéndose la remuneración de diversos ítems, por conceptos diversos, como tipo de jornada, lugar de trabajo, naturaleza ordinaria o extraordinaria de la jornada, entre otros, no se vislumbra que la rebaja aludida se haya debido a una decisión unilateral del empleador. Además, el trabajador no fundamenta de manera precisa y clara, cómo calcula la diferencia pretendida, lo que atenta lo dispuesto en el artículo 446 N°4 del Código del Trabajo.

Que en ese orden de cosas, no sé probó por el actor la rebaja unilateral de sus remuneraciones, por lo que será rechazada dicha pretensión, así como las cotizaciones previsionales y la sanción de nulidad pedida.

- v. Que, para resolver la acción de despido injustificado se deja constancia que los hechos en que se funda la causal de despido de *necesidades de la empresa* fueron los siguientes: *“Dicha decisión arranca su fundamento en que en la fecha referida se procederá a una reestructuración respecto de los docentes en la sede en donde usted se desempeña como trabajador. Lo anterior se fundamenta en la reorganización y reasignación de cursos a los docentes de preuniversitario Pedro de Valdivia Ltda., haciendo necesario prescindir de sus servicios”*.

“El fundamento de la necesidad de reestructurar se relaciona con la situación económica del país y los cambios en los procedimientos de ingreso a la



educación superior, lo que ha afectado el negocio al cual nos dedicamos. Lo anterior ha creado una gran incertidumbre en las familias, y ha redundado en una disminución de los alumnos en el actual proceso de matrícula. En efecto, a modo de mayor información, al día de hoy, la baja en comparación al mismo mes del año 2022 llega a un porcentaje cercano al 29,9%. Esperábamos que las condiciones de matrícula se estabilizaran durante este mes, lo cual no sucedió”.

“Cabe advertir que las funciones que Ud. Desempeño, serán reasignadas y no se contratarán reemplazo de sus funciones”.

Que, ejercida la acción de despido injustificado, el artículo 454 N°1 del Código del Trabajo pone de cargo del empleador la acreditación de los hechos y de las causales invocadas para poner término al contrato de trabajo.

Que, tenida a la vista la carta entregada al actor (de folio 15) ésta se refiere a hechos vagos, genéricos y que no aluden concretamente a la función él desempeñaba, ni de qué modo se vio afectada “la sede”, área o ámbito al que estaba asignado; no alude a la situación particular del cargo, número de profesores afectados por la reestructuración, y de qué modo se relaciona con la situación económica del país o cambios en los procedimientos de acceso a la educación superior.

Por otra parte, al deponer en juicio los testigos de la demandada, hicieron alusión a situaciones no mencionadas en la misiva, como sería la opción del demandante de desempeñarse únicamente en clases virtuales, sin embargo, ningún argumento puede hacer variar los hechos señalados en la carta de despido, por lo que son solo aquellos y no otros los que deben ser probados.

- vi. Que, en cuanto al cobro de la suma descontada por concepto de Administradora de Fondos de Cesantía, las partes suscribieron el finiquito y fueron pagadas las indemnizaciones legales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 inciso primero en relación con el artículo 162 del Código del Trabajo, descontándose por dicho concepto una suma determinada.

Que dicho descuento es legal como imputación a las indemnizaciones pagadas ya que corresponde a cantidades que pagó la demandada desde su patrimonio, con el fin de hacer pago en su oportunidad de los subsidios de cesantía al trabajador.

Que, habiéndose aplicado la causal de necesidades de la empresa, establecida en el artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo, el actor debió gestionar el pago del seguro de cesantía. Que, las sumas que entera el



empleador, por concepto de la Ley N°19.728 en la referida Administradora, han tenido precisamente el objeto de conformar el pozo del seguro de cesantía. Que, no obstante, el artículo 161 del Código del Trabajo, en relación al artículo 162 del mismo cuerpo legal, establece como un deber legal el pago de las indemnizaciones sustitutiva de aviso previo, cuando no se de aviso de 30 días con anticipación al despido, y el de la indemnización por años de servicios, pagos que se realizaron por la empresa demandada.

Que, el artículo 13 de Ley N°19.728, establece que es imputable la suma enterada por el empleador en la AFC a las indemnizaciones que procedan. Que, la jurisprudencia de los Tribunales, tanto de los tribunales inferiores como Superiores del país, han interpretado fluctuantemente esta disposición, señalando en algunos casos que, está vinculada de alguna manera la declaración de despido justificado o injustificado, sin embargo, la causal establecida en el artículo 161, no se modifica por el hecho de declararse injustificada su aplicación, esto es, para todos los efectos legales, el actor fue desvinculado por dicha causal, la que es objetiva, y más allá de la pérdida de la fuente laboral no causa más perjuicios para obtener otra fuente de empleo. Para el efecto, la ley dispone los beneficios de subsidio de cesantía y la sumas que le serían pagadas por la referida institución han sido incrementadas con los fondos aportados por el empleador, por ello, el hecho de restar la suma por concepto de AFC a las indemnizaciones legales que procedan, es de toda lógica desde el punto de vista causal. Además, los fondos que han sido enterados por la empresa son de su propio patrimonio y no han sido descontados de las remuneraciones del actor por lo que resulta irrelevante la calificación jurídica del despido.

5° En cuanto a la prueba, los demás antecedentes probatorios aportados por las partes fueron también analizados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 456 del Código del Trabajo y en nada alteran las conclusiones antes arribadas.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 1, 7, 161, 162, 168, 144, 446 y siguientes, 454, 456, 457, 459 y 485 y siguientes del Código del Trabajo, y 1545 del Código Civil, SE DECLARA:

I. Que se declara injustificado el despido de **Jorge Mauricio Monsalve Castillo**, y se condena a la demandada **Preuniversitario Pedro de Valdivia Ltda.** a pagar al actor la suma de \$7.739.695 por concepto del recargo del 30% de la indemnización por años de servicios, que establece el artículo 168 letra a) del Código del Trabajo.



II. Que se declara legal la imputación por concepto de Administradora de Fondos de Cesantía.

III. Que se rechaza la demanda en lo demás.

IV. Aplíquense en su oportunidad los intereses y reajustes legales.

V. Cada parte pagará sus costas.

Remítase correo electrónico a los abogados que lo hayan registrado en la causa.

RIT : O-3943-2023

RUC : 23- 4-0488373-9

Pronunciada por doña MARIA VERONICA TORRES REYES, Juez Titular del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

En Santiago a veintisiete de marzo de dos mil veinticuatro, se notificó por el estado diario la sentencia precedente.

